



**JUZGADO DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO Nº 3**
C/ VALLICIERGO, 8
Santander
Teléfono: 942-367338
Fax.: 942-367339
Modelo: TX004

Proc.: **PROCEDIMIENTO
ORDINARIO**
Nº: **0000330/2012**
NIG: 3907545320120000988
Materia: Otros actos de las CCAA no incluidos en los
apartados anteriores
Resolución: Sentencia 000137/2014

Intervención:	Interviniente:	Procurador:	Abogado:
Demandante	UNION TEMPORAL DE EMPRESAS "AMBERNE SA AMBULANCIAS MRD SL	ALFONSO ALVAREZ PAÑEDA	
Demandado	CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DEL GOBIERNO DE CANTABRIA		LETRADO COMUNIDAD AUTONOMA

SENTENCIA nº 000137/2014

En Santander, a veintitrés de Mayo de dos mil catorce.

Vistos por D^a. Ana Rosa Araujo Rugama, Magistrado-Juez del Juzgado de lo contencioso administrativo nº 3 de Santander los autos del procedimiento Ordinario 330/2.012, seguidos a instancia de UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS AMBERNE , S.A-AMBULANCIAS M.R.D., S.L, representada por el Procurador de los Tribunales, Sr. Álvarez Pañeda, actuando bajo la dirección letrada del Sr. Franco Rodríguez, contra la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria, representada y defendida por el letrado de sus Servicios Jurídicos; dicto la presente resolución:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El presente recurso contencioso administrativo se interpuso el día 4 de Septiembre de 2.012 contra la desestimación presunta del



recurso de alzada interpuesto por la recurrente contra la resolución dictada por el Director Gerente de Atención Primaria del S.C.S de 14 de Abril de 2.012, en el expediente GAP 01/2012, sobre adjudicación del contrato de gestión del servicio público modalidad concierto, cuyo objeto es la prestación del transporte integral sanitario terrestre en la Comunidad Autónoma de Cantabria, por la que se resuelve:

Declarar válido el procedimiento licitatorio y ratificar todas y cada una de las actuaciones que aparecen en el expediente tramitado.

Valorar las dos proposiciones que han superado las dos proposiciones que han superado las diferentes fases del proceso con la puntuación expresada en orden decreciente, asignando a AMBUIBÉRICA S.L, 55,35 puntos/100 puntos y a AMBERNE MRD S.L UTE; 54,36 puntos/100.

Adjudicar el contrato a la proposición económicamente más ventajosa que se corresponde a la formulada por AMBUIBÉRICA, S.L.

SEGUNDO.- Con fecha de 26 de Marzo de 2.014 se formalizó demanda, en cuyo suplico se interesa que se dicte sentencia por la que se estime el recurso y se declare nula de pleno derecho o, subsidiariamente, anule y deje sin efecto la resolución impugnada y la adjudicación a AMBUIBÉRICA S.L, del contrato, reconociendo el derecho de la recurrente a ser la adjudicataria de dicho contrato; y para el restablecimiento de su situación jurídica se declare el derecho de la recurrente a ser indemnizada en la cantidad de 7.534.436,45 euros por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de no habersele adjudicado el contrato, y se condene a la administración demandada a abonar a la recurrente citada cantidad e intereses legales, con imposición de costas a la demandada.

La administración demandada contestó a la demanda interesando su desestimación.

La cuantía del procedimiento se fijó en 7.534.436,45 euros.

TERCERO.- Se recibió el pleito a prueba proponiendo las partes sus respectivos medios que fueron admitidos, practicándose las ratificaciones y aclaraciones periciales el 16 de Septiembre de 2.013.

CUARTO.- El día 17 de Febrero de 2.014 se celebró vista en la que las partes expusieron sus respectivas conclusiones, declarándose los autos conclusos para dictar sentencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Objeto del recurso es la desestimación presunta del recurso de alzada interpuesto por la recurrente contra la resolución dictada por el Director Gerente de Atención Primaria del S.C.S de 14 de Abril de 2.012, en el expediente GAP 01/2012, sobre adjudicación del contrato de gestión del servicio público modalidad concierto, cuyo objeto es la prestación del transporte integral sanitario terrestre en la Comunidad Autónoma de Cantabria, por la que se resuelve:

Declarar válido el procedimiento licitatorio y ratificar todas y cada una de las actuaciones que aparecen en el expediente tramitado.

Valorar las dos proposiciones que han superado las dos proposiciones que han superado las diferentes fases del proceso con la puntuación expresada en orden decreciente, asignando a AMBUIBÉRICA S.L, 55,35 puntos/100 puntos y a AMBERNE MRD S.L UTE; 54,36 puntos/100.

Adjudicar el contrato a la proposición económicamente más ventajosa que se corresponde a la formulada por AMBUIBÉRICA, S.L.

Alega la recurrente que la resolución recurrida adolece de nulidad radical ya que vulnera cuanto preceptúa el TRLCSP, por cuanto en ningún

caso debió adjudicarse el contrato a AMBUIBÉRICA, sino que la misma debió ser excluida por los siguientes motivos:

Su proposición contravenía expresamente cuanto se establecía en el PCAP, apartado I, letra M, que expresamente establece que en ningún documento incluido en el sobre B debería figurar la antigüedad de las ambulancias ofertadas, y en contra de lo establecido, la adjudicataria hizo expresa referencia a vehículos de nueva adquisición, vulnerando el artículo 1 LCSP, principio de igualdad de trato y no discriminación.

Incumplimiento de las condiciones exigidas en el PPT, puntos 2.2.1, 2.2.2 y 2.2.3, y así se constata en el informe técnico, al señalarse que el despliegue ofertado de medios móviles, según relación del Anexo VI, no cumple con el parque mínimo exigido, no ofertando ni la totalidad del parque mínimo necesario para poder prestar el objeto del contrato, ni tampoco el parque móvil adicional, proponiendo los técnicos la inadmisión de la proposición, limitándose AMBUIBÉRICA, a efectuar una declaración genérica comprometiéndose a asignar a la ejecución del contrato los medios que fueran necesarios. Además, aportó los datos de cinco vehículos que no eran de su propiedad, sino de la empresa ARAGÓN ASISTENCIA, SL.

Incumplimiento de las condiciones exigidas en el PCAP, apartado I, letra M, respecto al sobre B, que establecía que debía incluir la documentación técnica en relación con el cumplimiento de los requisitos técnicos establecidos en el PPTP, y entre tales requisitos un plan de coordinación , operatividad y vehículos adicionales, sin que presentara el mismo, haciendo únicamente referencia en la documentación que aporta a las instalaciones y medios disponibles y operativos en otras provincias, pero o al plan de coordinación y operatividad específicos en Cantabria.

Vulneración del artículo 151 de la LCSP, por cuanto AMBUIBÉRICA no cumplimentó el requerimiento que le fue efectuado por la administración para acreditar que disponía efectivamente de los concretos medios que se había comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato, así como aportar la documentación que se le requería, debiendo haberse considerado que había retirado su oferta. Se presentaron 25 vehículos

diferentes a los ofertados modificando su proposición y no consta acta de comprobación por parte de los técnicos.

Vulneración del apartado 4 del artículo 151 de la LCSP, al no constar en la resolución la determinación de las características y ventajas de la proposición del adjudicatario y razones por las que ha sido seleccionada la oferta de éste. Tampoco motiva las razones por las cuales la adjudicación se realiza a favor del licitador que finalmente resulta adjudicatario del ser.

Por la administración demandada se interesó la desestimación de la demanda con base en las siguientes alegaciones:

AMBUIBÉRICA S.L cumplió los requisitos de solvencia establecidos en el PCAP, y PPT, para ser admitida a la licitación del contrato de gestión de servicio público de transporte sanitario terrestre.

Acreditó la efectiva disposición de los medios a adscribir para la ejecución del contrato en los términos del artículo 151.2 del TRLCSP y PCAP.

Todos los requisitos recogidos en el PPT relativos a la disponibilidad de vehículos para el contrato, centro de coordinación, permisos de circulación, tarjetas de visado de transporte, certificación sanitaria expedida por la Comunidad Autónoma de Cantabria, rotulación e identidad visual de los vehículos son exigibles únicamente al adjudicatario al inicio de la prestación, no a los candidatos licitadores dentro del plazo de presentación de las ofertas ni en el plazo establecido para la justificación de medios a adscribir a la ejecución del contrato del artículo 151.1 del TRLCSP, porque se trata de prescripciones técnicas relativas a la ejecución de la prestación que por ello se contienen en el pliego de prescripciones técnicas.

Impugna el importe reclamado por la recurrente en concepto de indemnización.

SEGUNDO.- De los motivos de impugnación opuestos por la actora se desprende que no discute la puntuación asignada a la adjudicataria o al propio recurrente, sino que entiende que aquella debió ser excluida del procedimiento de licitación por falta de solvencia, incurrir en la prohibición

del PCAP, en lo relativo a no hacer referencia a la antigüedad de las ambulancias ofertadas o debió entenderse retirada su oferta por incumplir el requerimiento efectuado por la administración al amparo del artículo 151.2 del TRLCSP.

El TRLCSP en sus artículos 31 a 33 concreta las causas de nulidad y anulabilidad de los contratos:

Artículo 31 Supuestos de invalidez

Además de los casos en que la invalidez derive de la ilegalidad de su clausulado, los contratos de las Administraciones Públicas y los contratos sujetos a regulación armonizada, incluidos los contratos subvencionados a que se refiere el artículo 17, serán inválidos cuando lo sea alguno de sus actos preparatorios o el de adjudicación, por concurrir en los mismos alguna de las causas de derecho administrativo o de derecho civil a que se refieren los artículos siguientes.

Artículo 32 Causas de nulidad de derecho administrativo

Son causas de nulidad de derecho administrativo las siguientes:

- a) Las indicadas en el artículo 62.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
- b) La falta de capacidad de obrar o de solvencia económica, financiera, técnica o profesional, debidamente acreditada, del adjudicatario, o el estar éste incurso en alguna de las prohibiciones para contratar señaladas en el artículo 60.
- c) La carencia o insuficiencia de crédito, de conformidad con lo establecido en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, o en las normas presupuestarias de las restantes Administraciones Públicas sujetas a esta Ley, salvo los supuestos de emergencia.
- d) Todas aquellas disposiciones, actos o resoluciones emanadas de cualquier órgano de las Administraciones Públicas que otorguen, de forma directa o indirecta, ventajas a las empresas que hayan contratado previamente con cualquier Administración. __Letra d) del artículo 32 introducida por el apartado tres del artículo 44 de la Ley 14/2013, de 27 de

septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización («B.O.E.» 28 septiembre). Vigencia: 29 septiembre 2013

Artículo 33 Causas de anulabilidad de derecho administrativo

Son causas de anulabilidad de derecho administrativo las demás infracciones del ordenamiento jurídico y, en especial, las de las reglas contenidas en la presente Ley, de conformidad con el artículo 63 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

TERCERO.- Respecto de la vulneración de la prohibición citada, esta juzgadora entiende que no es tal. En el apartado I, cuadro de características específicas del contrato, letra M. documentación a incluir en los sobres A, B y C, se establece que en ningún momento en el sobre B debe figurar referencia a la antigüedad de las ambulancias ofertadas. Ocurre sin embargo que la adjudicataria no incorporó dato alguno relativo a la antigüedad de las ambulancias ofertadas en el sobre B, sino que hizo la siguiente declaración que obra en el folio 273 del EA:

“ Que de resultar adjudicataria AMBUIBÉRICA S.L, los vehículos ofertados por la misma para la prestación del servicio serán todos de nueva adquisición y estarán operativos para la ejecución del contrato desde el inicio del mismo”.

Se refiere por tanto a un compromiso para el caso de resultar adjudicataria. Y respecto de las ambulancias que ofertó incluyó los permisos de circulación en el sobre C, haciendo mención a dicho extremo al final del Anexo VI. Es decir, los datos relativos a la antigüedad de las ambulancias ofertadas se incluyeron en el sobre C, siendo únicamente objeto de puntuación estas y no atribuyéndose puntuación alguna en relación con la mentada declaración, esto es, respecto de ambulancias aún no adquiridas, y así resulta de los permisos de circulación presentados, todos relativos a ambulancias con cierta antigüedad, no nuevas (folios 571 a 678 EA).

CUARTO.- Alega la recurrente que la adjudicataria debió ser excluida del procedimiento de licitación al no cumplir con el parque mínimo

exigido, esto es, por falta de solvencia técnica o profesional. En este punto asiste la razón a la administración en sus alegaciones en los siguientes términos:

De un lado, AMBUIBÉRICA presentó la clasificación requerida, hecho no discutido por la recurrente. En el apartado K del PCAP se admite la clasificación del contratista de forma potestativa y alternativa, estableciendo que de no acreditarse la clasificación el licitador podrá acreditar su solvencia por los medios señalados en el apartado siguiente, y en el relativo a la documentación a incluir en el sobre A, establece que deberá incluir la documentación relacionada en el apartado K o L y la documentación establecida en la cláusula 4.B que rige este contrato que acrediten la personalidad y la capacidad para contratar de los licitadores. Acreditada la clasificación requerida no existe falta de solvencia.

De otro, en el apartado L se establece que además de la documentación para acreditar su capacidad para contratar y su solvencia, todos los licitadores deberán presentar en el sobre A, la siguiente documentación (en lo que ahora interesa):

Compromiso ajustado al modelo que se adjunta como anexo VII (tratándose de un error, toda vez que dicho anexo hace referencia a la antigüedad de las ambulancias ofertadas, refiriéndose sin duda al ANEXO VI): Dotación de ambulancias a adscribir a la ejecución del contrato un número determinado de ambulancias de acuerdo con el PPT.

Condiciones mínimas: El número mínimo y modalidades de ambulancias disponibles en la fecha de la declaración será equivalente a las ambulancias incluidas como parque mínimo recogido específicamente en el PPT

Afirma el recurrente que la adjudicataria no incluyó el vehículo de apoyo logístico en situaciones de catástrofe y la ambulancia psiquiátrica. Pues bien, ocurre que en citado ANEXO VI al que se remite el apartado L como modelo al que se debe ajustar el compromiso mentado, no contiene casilla alguna en la que introducir citados vehículos, adjuntando la

adjudicataria declaración adicional de compromiso de adscribir a la ejecución del contrato citados vehículos. La contradicción existente en el ANEXO VI (que por cierto establece que las ambulancias ofertadas suponen el 100% del parque mínimo exigido para la ejecución del contrato, incluyendo y especificando las ambulancias de reserva) que no incluye citada casilla, en relación con la exigencia del PPT, unido al hecho de que por la mesa se entendiera suficiente la documentación aportada y no se requiriese de subsanación, impide que prospere el motivo de nulidad opuesto por la recurrente, toda vez que en caso contrario se estaría produciendo indefensión precisamente a la adjudicataria. Sin que podamos tampoco obviar que respecto a citado apartado de vehículos adicionales, AMBUIBÉRICA obtuvo 0 puntos.

No existe incumplimiento de parque mínimo exigido por el hecho de aportar los datos de cinco vehículos propiedad de ARAGÓN ASISTENCIA S.L, toda vez que forma parte de AMBUIBÉRICA, participando esta en aquella en un 93,3% de su capital social, siendo el administrador único y sociedad matriz AMBUIBÉRICA, según resulta del documento nº 1 de los aportados junto a la contestación a la demanda.

Tampoco asiste la razón al recurrente cuando afirma que se debió excluir a AMBUIBÉRICA, por cuanto no presentó un plan de coordinación y operatividad, al establecerse en el sobre B, criterios de adjudicación que dependen de un juicio de valor, en el que se consigna que deberá incluir la documentación técnica en relación con el cumplimiento de los requisitos técnicos establecidos en el PPT, entre ellos citado plan. La adjudicataria sí presenta el plan de coordinación, sin perjuicio de que las deficiencias observadas por los técnicos respecto del mismo tuviera como respuesta la asignación de dos puntos.

QUINTO.- Alega el recurrente que por la adjudicataria se incumplió el requerimiento efectuado por la administración al amparo del artículo 151 del TRLCSP. Afirma que no se acreditó que los vehículos concretos ofertados resultaban aptos para realizar la prestación y gestión del servicio público licitado, así como que alcanzaban el parque mínimo. Se

presentaron 25 vehículos diferentes a los ofertados, no se aportan las certificaciones técnico sanitarias y tarjetas de transporte de todos los vehículos ofertados, no se acredita que el Centro Coordinador en Santander y los parques logísticos periféricos desplegados en la CCAA, así como parques de mantenimiento y garajes cuenten con los permisos reglamentarios para ejercer la actividad, aportando únicamente las solicitudes de permisos. No consta tampoco en el EA acta de comprobación de los vehículos ofertados ni de la documentación.

Afirma que en cualquier caso debió dejarse la adjudicación sin efecto, puesto que ni siquiera los vehículos nuevos contaban con los permisos necesarios para realizar el servicio, constatándose a través del EA que 79 de dichos vehículos carecían de tarjetas de transporte y 10 de certificaciones sanitarias.

Hemos de partir del artículo que regula citado requerimiento:

“El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o autorice al órgano de contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello, de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 64.2, y de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente. Los correspondientes certificados podrán ser expedidos por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, salvo que se establezca otra cosa en los pliegos.

Las normas autonómicas de desarrollo de esta Ley podrán fijar un plazo mayor al previsto en este párrafo, sin que se exceda el de veinte días hábiles.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose

en ese caso a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.”

. Y citado artículo 64.2 al que se remite el anterior, establece:

“Los órganos de contratación podrán exigir a los candidatos o licitadores, haciéndolo constar en los pliegos, que además de acreditar su solvencia o, en su caso, clasificación, se comprometan a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello. Estos compromisos se integrarán en el contrato, pudiendo los pliegos o el documento contractual, atribuirles el carácter de obligaciones esenciales a los efectos previstos en el artículo 223.f), o establecer penalidades, conforme a lo señalado en el artículo 212.1, para el caso de que se incumplan por el adjudicatario”

Si atendemos al PPT, podemos concluir que la aportación de las certificaciones técnico sanitarias y tarjetas de transporte, eran exigibles al inicio de la prestación y no en dicho momento, esto es, antes de la adjudicación del contrato, y así resulta del apartado 2.3 del PPT.

La misma conclusión alcanzamos respecto del centro de coordinación, parques logísticos y parques de mantenimiento y garajes, no teniendo eficacia invalidante alguna el hecho de que no se aportaran permisos y licencias respecto de los mismos, sino únicamente solicitudes de dichos permisos, toda vez que el PCAP exige una declaración sobre la disponibilidad de los mismos o compromiso de disponerlos en la CCAA de Cantabria, si resulta adjudicatario y antes de comenzar la prestación. Por tanto únicamente era exigible la aportación de documentación identificativa del centro, documentación que la adjudicataria aporta y así resulta de los folios 716,725,726 y 727 del EA.

Sobre la presentación de 25 vehículos nuevos distintos a los ofertados, tampoco supone infracción alguna, toda vez que previamente AMBUIBÉRICA, se había comprometido en caso de resultar adjudicatario a que todos los vehículos serían de nueva adquisición, compromiso que

cumplió según resulta del certificado del Director Gerente de Atención Primaria de 5 de Abril de 2.013 (documento nº 2 de los aportados con la contestación a la demanda).

SEXTO.- Por último, alega la recurrente que la resolución recurrida incumple lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 151 del TRLCSP, al no constar la determinación de las características y ventajas de la proposición del adjudicatario y razones por las que ha sido seleccionada la oferta de éste. Tampoco motiva las razones por las cuales la adjudicación se realiza a favor del licitador que finalmente resulta adjudicatario del servicio.

Citado artículo establece:

La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a los candidatos o licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante.

La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita al licitador excluido o candidato descartado interponer, conforme al artículo 40, recurso suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación.

En particular expresará los siguientes extremos:

- a) En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones por las que se haya desestimado su candidatura.
- b) Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación, también en forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta.
- c) En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la proposición del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste con preferencia a las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas.

Será de aplicación a la motivación de la adjudicación la excepción de confidencialidad contenida en el artículo 153.

En todo caso, en la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe procederse a su formalización conforme al artículo 156.3.

La notificación se hará por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de su recepción por el destinatario. En particular, podrá efectuarse por correo electrónico a la dirección que los licitadores o candidatos hubiesen designado al presentar sus proposiciones, en los términos establecidos en el artículo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos. Sin embargo, el plazo para considerar rechazada la notificación, con los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, será de cinco días.”

Ninguno de los defectos denunciados se observan en la resolución recurrida. En los antecedentes de hecho se reseñan cada una de las fases del procedimiento de licitación y se resuelve adjudicar el contrato a la proposición económicamente más ventajosa de acuerdo con los criterios de adjudicación. Con expresa referencia al artículo transcrito, se establece que la valoración de las proposiciones de los licitadores y que fundamentan la adjudicación, se sustenta en el informe técnico ratificado por la Mesa de Contratación, para la valoración de los criterios sujetos a un juicio de valor y en las fórmulas establecidas en el PCAP para la valoración de los criterios de evaluación automática mediante fórmulas.

De lo expuesto resulta que la resolución recurrida no incurre en causa de nulidad o anulabilidad alguna, procediendo la desestimación del recurso.

SÉPTIMO.- De conformidad con el artículo 139.1 de la LJCA, las costas se imponen al recurrente.

FALLO



DESESTIMO el recurso contencioso administrativo interpuesto por UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS AMBERNE , S.A-AMBULANCIAS M.R.D., S.L, representada por el Procurador de los Tribunales, Sr. Álvarez Pañeda, contra la desestimación presunta del recurso de alzada interpuesto por la recurrente contra la resolución dictada por el Director Gerente de Atención Primaria del S.C.S de 14 de Abril de 2.012, en el expediente GAP 01/2012, sobre adjudicación del contrato de gestión del servicio público modalidad concierto, cuyo objeto es la prestación del transporte integral sanitario terrestre en la Comunidad Autónoma de Cantabria, por la que se resuelve:

Declarar válido el procedimiento licitatorio y ratificar todas y cada una de las actuaciones que aparecen en el expediente tramitado.

Valorar las dos proposiciones que han superado las dos proposiciones que han superado las diferentes fases del proceso con la puntuación expresada en orden decreciente, asignando a AMBUIBÉRICA S.L, 55,35 puntos/100 puntos y a AMBERNE MRD S.L UTE; 54,36 puntos/100.

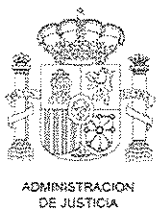
Adjudicar el contrato a la proposición económicamente más ventajosa que se corresponde a la formulada por AMBUIBÉRICA, S.L.

Se imponen las costas al recurrente.

Notifíquese esta resolución a las partes personadas, haciéndoles saber:

MODO DE IMPUGNACIÓN

*Recurso de **apelación** ante este órgano judicial en el plazo de **QUINCE DIAS** desde su notificación, debiendo acompañar el documento que acredite el ingreso de **50 EUROS** en la cuenta de consignaciones de este Órgano Judicial en Banesto con el número **390300000033012** debiendo especificar en el campo "concepto" del documento de resguardo de ingreso que se trata de un "**Recurso**" seguido del código "**22 Contencioso-Apelación (50 €)**", y en el campo de observaciones, la **fecha de la resolución** objeto de recurso en formato **dd/mm/aaaa**. Los ingresos deberán ser **individualizados** para cada resolución recurrida, con el apercibimiento de que no se admitirá a trámite ningún recurso cuyo depósito no esté constituido.*



Quedan exentos de su abono, en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y los Organismos Autónomos dependientes así como aquellos que tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita (disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, añadida por la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la Ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial).

Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para su unión a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

El/La Magistrado-Juez

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Ilmo./a Sr/a. Magistrado-Juez que la suscribe, estando celebrando audiencia pública en el día de su fecha. Doy fe.

